

Santiago, a cuatro de noviembre de dos mil cuatro.-

Vistos y teniendo presente:

1º.- Que han comparecido los Sres. Efrén Osorio Jara, en representación del Partido Humanista, Lautaro Carmona Soto, en representación del Partido Comunista de Chile, Carlos Manuel Donoso Pacheco, Coordinador Nacional de la Izquierda Cristiana, Fresia Mónica Quilodrán Ramos, Dirigente Nacional del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y José Alcayaga Olivares, dirigente nacional del Comité de Defensa del Cobre, todos con domicilio en calle Carmen N° 340, de esta ciudad, sede nacional del PODEMOS, quienes deducen querrela criminal por los delitos de tortura y crímenes de guerra en contra de los Sres. George W. Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Collin Powell, Paul Bremer, gobernador de ocupación de Irak, Janis Karpinski, generala a cargo de la Prisión de Abu Ghraib, y en contra de todos quienes resulten responsables de la comisión del crimen internacional de tortura que infringe la Convención Internacional de las Naciones Unidas, contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes, por su responsabilidad en la comisión de atentados contra la integridad personal y la dignidad de las personas detenidas en la prisión de Abu Ghraib, conductas que en nuestro derecho configurarían el delito de aplicación de tormentos penado en el artículo 150 del Código Penal.

2º.- Que los recurrentes afirman que, dada la calidad de presidente en ejercicio que inviste el Sr. George W. Bush, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 N°s. 3º y 5º del Código Orgánico de Tribunales, la cuestión planteada sería de competencia de un Ministro de esta Corte de Apelaciones, invocando el principio de jurisdicción internacional para penar estos crímenes, de acuerdo a lo previsto en las Convenciones de Ginebra de 1949 y, fundamentalmente, en el artículo 7º N° 1 de la citada Convención Internacional contra la Tortura, de 1984, que dispone lo siguiente:

"El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona de la cual se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, en los supuestos previstos en el artículo 5,

si no procede a su extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento."

3º.- Que antes de analizar las Imputaciones que se formulan en la querella, resulta previo dilucidar si este tribunal está provisto de jurisdicción para conocer de hechos atribuidos a un soberano extranjero, en ejercicio de su mandato.

4º.- Que la jurisdicción penal tiene como límite universalmente reconocido en el derecho internacional el principio de la inmunidad de jurisdicción, en virtud del cual el Estado o las personas que lo representan quedan excluidos de toda posible persecución penal en territorio extranjero, para garantizar el eficaz e independiente desempeño de sus funciones, y como demostración del reconocimiento de la soberanía de otro Estado.

5º.- Que, recogiendo este principio, el Código de Derecho Internacional Privado, en su artículo 297, dispone que la ley penal chilena no es aplicable a los Jefes de Estado extranjeros que se encuentren en visita en el territorio nacional, excepción que el artículo 298 extiende a los representantes diplomáticos de los estados extranjeros.

6º.- Que los Estados Partes de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas suscrita el 18 de abril de 1961, publicada en el Diario Oficial de 4 de Marzo de 1968, tuvieron en cuenta para aprobarla, entre otros fundamentos, "...los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos a la igualdad soberana de los Estados, al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales y al fomento de las relaciones de amistad entre las naciones", destacando que los privilegios e inmunidades diplomáticas que allí se consagran se conceden "no en beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el desempeño eficaz de las funciones de misiones diplomáticas en calidad de representantes de los Estados.."

7º.- Que fueron objetivos y principios de esta misma naturaleza los que inspiraron también la Convención sobre la Prevención y el Castigo contra las Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos, publicada en el Diario Oficial de 29 de marzo de 1977, al haber considerado los Estados Partes que los delitos contra personas

internacionalmente protegidas "crean una seria amenaza para el mantenimiento de relaciones internacionales normales, que son necesarias para la cooperación entre los Estados".

El artículo 1° de esta Convención entiende como "persona internacionalmente protegida", entre otros, al jefe de Estado, de gobierno o ministro de relaciones exteriores que se encuentre en un Estado extranjero, así como cualquier representante, funcionario o personalidad oficial que conforme al derecho internacional tenga derecho a protección especial.

8°.- Que de lo expuesto se colige que las reglas internacionales que regulan la convivencia entre los Estados impiden que con motivo de la reunión internacional a que ha sido invitado a participar en nuestro país, pueda verse afectada la inmunidad absoluta que privilegia a un Jefe de Estado extranjero y demás personas que integran su comitiva.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 73 de la Constitución Política de la República, 1°, 5°, 6°, 7°, 50 del Código Orgánico de Tribunales, 1° del Código de Procedimiento Penal, se declara inadmisibles las querellas deducidas en el primer otrosí de fs. 22, por falta de jurisdicción de este tribunal para conocer de los hechos denunciados.

Regístrese.

Rol N° 30.378-2004

Dictada por doña Rosa María Maggi Ducommun, Ministro de Fuero.